



## LA ZONA GRIS EN COLOMBIA : MINERÍA ILEGAL, CONTROL TERRITORIAL Y DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL.

La “zona gris” se refiere a espacios en los que la autoridad estatal es débil o ausente, permitiendo que actores ilícitos operen sin llegar al nivel de conflicto armado abierto, pero generando desafíos graves a la gobernabilidad y al Estado de derecho (Torres, 2019). Conceptualmente, representa un área de ambigüedad estratégica donde el control territorial es disputado mediante tácticas no convencionales como la corrupción, violencia selectiva y economías ilegales. En Colombia, la minería ilegal encarna esta zona gris, pues grupos armados aprovechan la ausencia del Estado para extraer recursos naturales ilícitamente, financiando actividades criminales y sociopolíticas que afectan la seguridad nacional (ANEPE, 2021).



Un ejemplo paradigmático es la minería ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño y el departamento del Chocó, donde grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN han instaurado economías extractivas ilícitas mediante el uso de la violencia para el control territorial (Forero & Restrepo, 2024). La contaminación por mercurio en el río Atrato, declarado sujeto de derechos, y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrodescendientes, reflejan la multifacética crisis socioambiental y de seguridad derivada de la zona gris minera, evidenciando la necesidad imperiosa de enfoques integrales que articulen política, seguridad y protección ambiental (Rubio & Díaz, 2023; Torres, 2019).

Entre las características de la minería ilegal en estas zonas destacan la sustitución del Estado por actores armados ilegales que imponen control territorial y normativo, la articulación con economías ilícitas como el narcotráfico, y la grave afectación ambiental y social, especialmente en poblaciones vulnerables (Rubio & Díaz, 2023). La violencia derivada de estas actividades y la corrupción vinculada a cadenas de suministro ilegales profundizan la debilidad institucional y consolidan economías criminales que actúan impunemente en regiones donde el Estado no puede ejercer control pleno, generando un círculo vicioso difícil de romper (Torres, 2019).

